

Directrices para una política sostenible del agua.

Enrique Cabrera

La declaración del 2003 como Año Internacional de las Aguas Dulces efectuada por Naciones Unidas tiene sabor agridulce. En su deber, el estado de unas aguas sobre las que invita a la reflexión y que, de ser el que debiera, la idea no hubiera cristalizado. En su haber, la sensibilidad ante la creciente inquietud que ese mismo estado suscita. Porque para resolver un problema hay que tener conciencia de su existencia. La ONU, en definitiva, quiere alertar a la opinión pública mundial sobre uno de los más graves problemas, posiblemente el que más, que debe afrontar la sociedad del siglo XXI. De algún modo se ha hecho eco de la serie de acontecimientos relacionados con el agua que, al más alto nivel, han tenido lugar en los últimos años. Hablo de la segunda Cumbre Mundial del Agua (La Haya, 2000), la Conferencia Internacional sobre Aguas Dulces (Bonn, 2001), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) y la tercera Cumbre Mundial del Agua (Kyoto, 2003). Con todo, tantos eventos no eclipsan la Directiva Marco del Agua (DMA) que, tras intensos debates, Bruselas por fin promulga en diciembre de 2000.

Las conclusiones de estos eventos, conjuntamente con las directrices de la DMA, permiten establecer el decálogo que deberá seguir cualquier política del agua que con hechos, y no sólo con dichos, apueste por la sostenibilidad. Es el siguiente:

1. Participación ciudadana. Análisis globales, soluciones locales.
2. Ética del agua. Transparencia en la gestión. Gestión sostenible del recurso.
3. Políticas de consenso: del Conflicto a la Colaboración Potencial.
4. Gestión integral del agua. Estricto control del recurso y del gasto.
5. Economía del agua. Recuperación completa de los costes de su uso.
6. Gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas.
7. Minimización de los riesgos derivados de acontecimientos extremos (sequías y avenidas).
8. Riguroso control de la contaminación.
9. Gestión de la demanda como contrapeso indispensable a la gestión de la oferta.
10. Reforma de una administración que debe adecuarse a los desafíos que el siglo XXI plantea.

El marco delineado por el precedente decálogo tiene poco que ver, lo evidencia un análisis de la política actual, con el que hoy nos preside. Gastamos las energías en justificar el Plan Hidrológico Nacional (PHN), sobre todo su piedra angular el trasvase del Ebro, mientras el paso del tiempo acrecienta los retos a los que el decálogo debe hacer frente. Por ello, en este contexto, la pregunta clave es ¿resuelve el PHN, trasvase incluido, el futuro del agua en España?. Si la respuesta es positiva convendrá calificar la actual estrategia de manera análoga. Y si no es así, habrá que admitir que se está perdiendo un tiempo precioso.

En mi opinión el verdadero debate consiste en definir el camino a seguir para establecer una política sostenible. En este contexto es del caso referirme a una anécdota de Francesc Cambó, el jefe de la Lliga Catalana conservadora que en 1930 ayudó a restablecer la monarquía en contra de los sentimientos republicanos de muchos catalanes. La réplica de Cambó, en forma de pregunta -

respuesta, no esperó. ¿Monarquía, república?. ¡Cataluña!. De modo análogo a la pregunta ¿sí o no al trasvase? le corresponde la respuesta ¡política sostenible del agua!. Y no es echar balones fuera. Como en la contestación de Cambó es anteponer el objetivo a una acción que está por ver si lo propicia. Sólo en el marco de una política sostenible tiene sentido el debate del trasvase.

Se necesita una transición que nos conduzca desde una política concebida hace un siglo, en circunstancias diferentes a las de hoy, a una política sostenible que permita mirar el futuro con optimismo. No es un camino fácil. Historia, cultura, organizaciones centenarias, derechos históricos, intereses creados, respeto, si no miedo, a abrir el verdadero debate,..., todo invita al inmovilismo. Pero si convenimos con Gibbon que lo que no evoluciona es decadente, la actual política del agua lo es y, ya que la situación empeora, lo será aún más. De ahí la necesidad de reconducirla con tino, firmeza y prudencia. Para ello nada mejor que un pacto de Estado, imposible en el corto plazo por la proximidad de los comicios, que aleje el agua de la arena política. Nadie hasta ahora ha sido capaz de renunciar a este bombón electoral, lo que explica que oposición y gobierno, sin el menor decoro, han alternado, en función de la responsabilidad del momento, sus posiciones al respecto.

Sin duda que el cambio es necesario. Los usos no se controlan, las infraestructuras no se mantienen, la política de precios no existe, el agua no se mide, la gestión de la demanda no se sabe en qué consiste, las aguas subterráneas están descontroladas, contaminadas y salinizadas, los ríos sucios y exhaustos, las redes de distribución urbana son coladores, las de riego mejor no mentarlas y, en fin, con todas estas carencias, la actual política del agua en vez de educar, sigue mimando al ciudadano. Todo un inmenso edificio sostenido por unos subsidios que viven de unos fondos europeos de próxima caducidad (el 2006) y por una demagogia que, generando un ambiente crispado y maniqueo, dificulta hasta la respiración.

España fue capaz de hacer una transición política ejemplar sobre dos puntos de apoyo. Los ciudadanos la querían y quienes, desde el poder, la podían realizar sin traumas estuvieron por la labor. Abiertos desde hacía años a Europa, España no podía seguir aislada por una dictadura. Por desgracia la política del agua que hoy nos ocupa no está tan madura, y sin una crisis que acelere los acontecimientos, la transición deberá esperar. La sociedad, aún con pobre cultura medioambiental no reclama el cambio, y muchos medios de comunicación, aleccionados por quienes los controlan, no hacen nada por educarla. Porque con el nivel de formación actual dos años bastarían para hacerle ver que la sostenibilidad no es gratis. Ese fue el tiempo que, en respuesta a los graves problemas de calidad de sus aguas, requirió Dinamarca para pasar de una política de subsidios a otra sostenible basada en la recuperación de costes. En Copenhague el precio del agua urbana pasó de uno a tres euros en tan sólo dos años (entre 1990 y 1992). Y habiéndose explicado, todos lo entendieron.

Tampoco se cuenta con el segundo ingrediente requerido, la voluntad de quienes la pueden propiciar, un factor decisivo ya que políticos y administración son quienes pueden catalizar del proceso. Con más datos que nadie son conscientes de la situación actual. Hablan con Bruselas, participan en los foros que han permitido establecer el decálogo que preside este artículo, y están en contacto con los países de mayor sensibilidad medioambiental. Aunque nada les es nuevo no van a mover ficha. Los políticos por culpa del mayor defecto de la democracia (prima el corto plazo sobre el medio - largo plazo), y la administración para no perder su papel estelar. Y si quienes pueden propiciar el cambio no están por la labor, éste, como tengo escrito, vendrá de la mano de una compañía indeseable, una crisis, bien de cantidad (sequía), bien de calidad (contaminación). Tiene,

ya con los días contados, un convidado de piedra, los subsidios. Tocados de muerte por el fin de los fondos europeos, la entrada en vigor, en el 2010, del artículo 9 de la DMA acabará erradicándolos. Y en este nuevo contexto (el 2006 está ya a la vuelta de la esquina), si no se mejora la gestión, el actual bombón electoral puede tornarse en dardo envenenado, máxime si una crisis hace más evidente las actuales carencias.

Sobre el complejo tablero de sentimientos e intereses que es el mundo del agua, condicionado por la hidrología (el ciclo húmedo de ocho años se puede acabar), es imposible predecir el futuro. Lo único obvio, no hay más que comparar los ríos y acuíferos de ahora con los de hace unas décadas, es la galopante degradación del recurso natural más vulnerable y necesario, al fin y a la postre la razón que ha originado la declaración del 2003 como Año Internacional de las Aguas Dulces. Sería deseable que la parte positiva del mensaje, sensibilizar al ciudadano, propiciara un nuevo marco que hiciera posible el verdadero debate. Porque el actual nada tiene que ver con el futuro. Sigue la estela de una historia cuya dirección, la de la insostenibilidad, es bien conocida.